

ESTRATEGIAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL DESARROLLO TERRITORIAL: APUNTES SOBRE LA CONFORMACIÓN DE CÍRCULOS DE PRODUCCIÓN-CONSUMO

Strategies of the Solidarity Economy in territorial development:
notes on the formation of production-consumption circles

por **Alberto Gandulfo** y **Alejandro Rofman**

RESUMEN

Alberto Gandulfo es Lic. en Sociología (UBA), coordinador del Programa Fortalecimiento de la Economía Solidaria de la Fundación Banco Credicoop y exsubsecretario de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Alejandro Rofman es Doctor en Economía (UNC), Investigador Principal del Conicet en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Entre Ríos.

Este texto se estructura en base a cuatro apartados. El primero trata del contexto económico-social reciente en el desarrollo argentino. El segundo hace referencia a las iniciativas destinadas a la satisfacción del consumo local en los últimos cinco años. El tercero describe qué son los círculos de Producción-Consumo y el cuarto se refiere al futuro de los mismos habida cuenta del contexto económico-social prevaleciente, el que fuera descripto al inicio del documento.

Palabras clave: territorio, economía circular, solidaridad, sociedad.

ABSTRACT

This paper has been structured on the basis of four sections. The first one deals with the recent socio-economic context of the Argentine economic development. The second, refers to initiatives aimed at satisfying local consumption in the last five years. The third describes what the Production-Consumption circuits are. And, the fourth refers to their future, taking into account the prevailing economic-social contexts, which were described at the beginning of the article.

Keywords: territory, circular economy, solidarity, society.

Recibido: 10 de abril de 2018

Aceptado: 10 de mayo de 2018

INTRODUCCIÓN

En sucesivas contribuciones a encuentros de especialistas en la problemática de la sociedad Argentina contemporánea, hemos aportado reflexiones acerca de la evolución del proceso de desarrollo capitalista contemporáneo y su incidencia social. En dichos aportes, que consignamos en la bibliografía adjunta, hemos insistido en que por las modalidades que ha adoptado el desarrollo capitalista en la Argentina se han producido serios desajustes de tipo estructural, como la concentración de la actividad productiva en cada vez menos agentes económicos de elevado tamaño con poder abusivo de mercado y una creciente desigualdad en la apropiación del excedente económico por parte de los sujetos sociales que mayores ingresos perciben en relación con los que están ubicados en los estratos menos favorecidos. Ello, en perjuicio de la producción nacional, acentuando la precarización laboral y, por consiguiente, generando mayor brecha social.

Estas consideraciones generales no son novedosas en los estudios y análisis de destacados especialistas en los últimos 30 años. Las distintas variantes de las políticas económica y social adoptadas por los gobiernos de turno tras el restablecimiento de la democracia en 1983 se mostraron claramente incapaces para enfrentar este proceso negativo de bajo nivel de crecimiento económico acompañado por una notoria y creciente desigualdad social. Este escenario –en permanente expansión en el reparto del ingreso nacional entre los más y los menos favorecidos por la evolución histórica de nuestra sociedad hasta inicios de este siglo– tuvo un importante cambio de

rumbo a partir del año 2003 cuando una estrategia de desarrollo económico con creciente inclusión social –que apuntaba a valorizar el trabajo como eje central de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo– posibilitó que se revirtiese a favor de los sectores populares el proceso de distribución del ingreso generado año tras año por la economía nacional; que, además, se enmarcó en la construcción de una estrategia soberana de integración latinoamericana con la instrumentación de políticas distributivas que priorizaron el desarrollo del mercado interno, fomentaron la producción con la creación de empleo y promovieron la Economía Social y Solidaria como otra forma de integración social. Como ocurre con la *agricultura familiar* donde se valoriza la *soberanía alimentaria* a través de la producción de alimentos saludables, el cuidado del medio ambiente y se promueve una nueva ruralidad.

En los primeros 20 años de la evolución económico-social restablecido el sistema democrático, la vigencia de un proyecto neoliberal signado por la concentración creciente del capital, su extranjerización cada vez más relevante y sus resultados socialmente regresivos en términos de equidad y justicia social fueron los signos más distintivos de dicha política –salvo un reducido lapso al inicio de la experiencia alfonsinista que intentó enfrentarlo, pero que rápidamente fracasó–. El proyecto de acumulación estructurado con la experiencia menemista, que se prolongó más de una década, adoptó el paradigma de basar el crecimiento económico en la especulación y valorización del capital financiero, y fue responsable de una acentuada degradación social y de un espectacular derrumbe económico hacia inicios del siglo. La etapa surgida en el 2003, tras la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, pudo poner

en marcha un proyecto centrado en la reactivación productiva a causa de un fortalecimiento singular del mercado interno, con creciente expansión del empleo y el salario real como auténticos motores del crecimiento económico, lo cual produjo una sensible baja de la pobreza y la indigencia, y un evidente mejoramiento en la distribución del ingreso.

En el proceso de desenvolvimiento de esta estrategia el proyecto colocó a la creación programada de instrumentos de política, instituciones acordes y formas de organización social alternativas enroladas en la Economía Social y Solidaria como uno de los pilares de su accionar. Los avances en la puesta en marcha de pasos decisivos y significativos en pos del afianzamiento de otra modalidad de crecimiento económico y social basado en la solidaridad, la cooperación; el rechazo a formas abiertas y/o encubiertas de explotación social de los trabajadores; y el aliento al asociacionismo igualitario de los proyectos productivos fueron muy destacados.

Se pudieron así concretar iniciativas muy valiosas que quedaron trucas cuando la derrota electoral del año 2015 supuso un nuevo episodio histórico de restauración conservadora y neoliberal, con la vigencia del negocio financiero como eje central del proceso de acumulación. Este retorno de la dinámica de crecimiento sustentada por quienes consideran al capital financiero como fuente central de obtención de ganancias supuso relegar todo principio de organización del capital productivo como las Pyme y las empresas de producción nacional, y las diferentes formas organizativas surgidas con base en la solidaridad, la cooperación y sin fines de lucro, a la vez que desplazó al trabajo como fuente esencial de producción de valor

agregado. El trabajo volvió a ser solamente considerado como un costo esencial de la desmedida acumulación capitalista y abandonó el rol de integración social que tenía hasta fines del año 2015.

El proyecto de concentración económica vigente en Argentina, y en varios países de América Latina, descansa en el respaldo de una alianza entre los cultores históricos del capital financiero como fuente central de obtención de elevadas ganancias, y apela a la especulación altamente rentable de enormes recursos monetarios, preferentemente externos, junto con grandes capitales internos orientados a la exportación de *commodities* y bienes semindustrializados, con bajo contenido de valor agregado. Es una alianza con conflictos derivados de la firme intención de la especulación de que la inflación y el tipo de cambio no crezcan como lo han venido haciendo porque dañan el negocio de la «bicicleta financiera», y del clamor de los exportadores (grupos económicos nacionales y filiales de grandes conglomerados empresariales, como el automotriz) por una elevación mayor del tipo de cambio. Pero este acuerdo hegemónico no tiene ninguna intención de mirar hacia adentro ni hacia los sectores del trabajo y la pequeña y mediana producción. La restricción del consumo masivo y del sector manufacturero (excepto la circunstancial expansión de insumos para la construcción) sigue en negativo desde el 2015.

Esta alianza, en donde predomina claramente el segmento de los especuladores financieros, se desenvuelve históricamente con diferentes impactos según el modo de inserción de cada sector en el control del proyecto hegemónico. No podemos dejar de mencionar el agudo proceso de fuga de capitales financiado con una política de

endeudamiento externo impagable que pone en peligro el futuro de la evolución económica nacional. Los resultados macroeconómicos hasta ahora son magros y muestran una fuerte heterogeneidad en su incidencia en los sectores productivos, y los efectos a nivel social exhiben un deterioro de las condiciones de vida del amplio arco mayoritarios de sectores de la sociedad que han quedado excluidos de los beneficios de la política económica oficial, reservada para los pocos y muy privilegiados protagonistas de la dinámica de acumulación económica nacional.

La actividad económica, luego de dos años de instalada la restauración neoliberal, muestra índices agregados que solo la hacen regresar, en término de producto por cápita, al punto de partida: el cierre del año 2015. Un año de retroceso del producto bruto, del nivel del 2,2%, en el año 2016, y un año de avance del citado indicador (2017) que exhibe un aumento provisional del 2,8%. El índice del producto por habitante entre diciembre de 2015 y diciembre del 2017 es prácticamente similar. Los sectores productivos más favorecidos, acorde con los datos de la evolución respectiva del valor agregado por cada uno de ellos, durante el año 2017 con referencia al año anterior, son los constituidos por el complejo agroexportador de carnes vacuna, cereales y oleaginosas en sus distintos eslabonamientos; el sector financiero; el rubro de la construcción alentado fuertemente por la inversión en obra pública y algunas ramas de la industria manufacturera, en particular, aquellas actividades vinculadas al citado segmento de las construcciones. En el sector de la actividad primaria de base agraria, la bonanza producida por la devaluación y por la quita parcial o total de las retenciones solo abarcó a aquellos actores sociales involucrados

en la especulación financiera de los agronegocios y excluyó de modo singular a las cooperativas agropecuarias y a los pequeños productores de la agricultura familiar.

Si nos referimos a la actividad industrial, esta aún no pudo volver a los niveles del año 2015, pues el retroceso de casi 5 puntos que exhibió el desenvolvimiento sectorial en el año 2016 se modificó y pasó a signo positivo en el año 2017, aunque la información oficial consigna –con datos provisorios– solamente un 1,5% de aumento del producto bruto interno PBI sectorial acorde con lo que informa el Estimador Mensual de Actividad Industrial que publica el INDEC. En el área de producción de bienes manufacturados, el ya comentado impulso decidido a la obra pública en el segundo semestre del año 2017 dio sus frutos con el incremento de gastos e inversiones en dicho rubro, que se extendió a sectores de la actividad manufacturera vinculada con la obra pública y algunos emprendimientos privados alentados por la emisión de hipotecas indexadas. Sin embargo, ese impulso multiplicador, que siempre deparan las actividades de la construcción, tiene impacto limitado en los procesos de aprovisionamiento de materiales y no se difunde al resto de las actividades del sector industrial.

El efecto de arrastre «hacia atrás» de los procesos manufactureros favorecidos se hace notar en dos rubros destacados: la rama de «minerales no metálicos» que reúne a los procesos productivos responsables de insumos básicos, como arena, cal, cemento, etcétera; y «rubros selectivos» de la industria metalúrgica ligada al acero y al hierro, en particular, en el caso de hierro redondo de encofrados para la construcción de pavimentos urbanos e interurbanos. Quedan afuera

los procesos vinculados con la industria alimenticia, la textil, del cuero y calzado estrechamente relacionados con la generación de insumos en la actividad agraria. Tal es así que si se revisan los últimos datos oficiales sobre el empleo registrado, al cierre del año 2017, se podrán contabilizar más de 60.000 puestos de trabajo netos perdidos en el sector con respecto a fines del 2015. Esta caída del empleo, en correspondencia con la reducción de la actividad productiva de origen manufacturero, ligada con preferencia al mercado interno, descansa en dos fenómenos que forman parte esencial del proyecto dominante: la contracción del consumo popular de bienes de primera necesidad, marcado por todas las estadísticas oficiales y privadas; y el flujo importador en constante incremento que desplaza a la producción nacional en áreas muy significativas de la actividad manufacturera interna.

Este resultado negativo en producción y fuerza de trabajo ocupada que se advierte a partir de las estadísticas oficiales para fines del año 2017, con relación al 2015, es fiel reflejo de la disminución generalizada del salario real de los trabajadores en relación de dependencia, tanto en los sectores formal como informal, y de la apertura de la economía que posibilitó un flujo creciente de bienes de consumo desconocido desde principios de este siglo. En este fenómeno de disminución del salario real no podemos dejar de omitir los aumentos desmesurados de tarifas públicas, que no solo afectaron el poder adquisitivo de los sectores populares, sino que constituyen un incremento muy elevado de los costos productivos que afectó con mayor intensidad a los pequeños productores de la agricultura familiar con un fuerte nivel de endeudamiento particular debido a la imposibilidad de abonar los nuevos

valores de las tarifas públicas.

Es precisamente en estos núcleos destacados de la industria manufacturera donde se concentra la actividad basada en la oferta de los establecimientos rurales de menor dimensión instalados en los espacios de producción agropecuaria del país. Alimentos frescos para el aprovisionamiento diario de los hogares urbanos del país e insumos destacados para uso industrial (algodón, lana, frutas, leche, cereales como trigo y maíz, hortalizas, legumbres, carnes blancas, etcétera) son los más destacados aportes de los agricultores familiares que sufren los embates de la nueva política económica a partir del 2015.

El año 2017, por ende, deja un balance negativo para la capacidad de expansión posible en los procesos de la agricultura familiar. Existe menor demanda debido tanto a la caída del salario real promedio de los trabajadores como al incremento de la tasa de desempleo entre 2015 y 2017 en alrededor de 3 puntos porcentuales, y a la reducción de la oferta total de bienes de consumo por ingresos crecientes de importaciones competitivas que reemplazan los que se producen internamente. Además de este perfil específico que asume el ajuste económico que afecta a los sectores sociales de menores ingresos se agrega el creciente costo de reproducción de la fuerza de trabajo, que impacta a las unidades familiares asentadas en zonas rurales. La elevación de los precios de los alimentos, rubro de fuerte incidencia en la canasta familiar de los consumidores comprendidos en los tramos de ingresos menores que el promedio general, fue con mayor fuerza aún que las tasas promedio de inflación y acentuó el deterioro social de los pequeños productores y sus familias (ver Informes del Centro de

Estudios German Abdala de la UMET). Finalmente, la intermediación en sus diversas manifestaciones, sin regulación por parte del Estado que acotase su destacado poder predominante, pudo captar crecientes cuotas del excedente total de la comercialización de los productos obtenidos por los agricultores familiares, como lo indican las estadísticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), organización empresarial que agrupa a los sectores del comercio minorista de todo el país.

A partir de este escenario contextual inscribimos una propuesta de desempeño programado de la producción de bienes y materias primas para la alimentación de los hogares urbanos contiguos a las áreas de producción, intentando que la estrategia a adoptarse suponga un robustecimiento en el desenvolvimiento de los actores sociales incorporados a la actividad productiva, a la vez que se dispongan acciones estimuladoras del consumo masivo de los mismos con precios justos y accesible a todos los sectores sociales involucrados situados en aglomeraciones contiguas a las áreas de producción.

LAS EXPERIENCIAS RECIENTES DE PROCESOS PRODUCTIVOS TERRITORIALIZADOS Y SU VINCULACIÓN CON EL CONSUMO LOCAL

En el panorama general que hemos descripto aparecen claramente las consecuencias de una política económica que supone un giro total de objetivos y procedimientos en relación con la que prevalecía antes del 10 de diciembre del 2015. De resultados de la nueva política económica que privilegia la valorización financiera se impone como espacio

para el perfeccionamientos de las relaciones de producción al mercado como espacio privilegiado y se impone el principio fundamental de que el libre desenvolvimientos de los agentes económicos contribuye al bienestar general y que se deben descartar todo tipo de interferencias al accionar desregulado de tales agentes, y de que es preciso posibilitar a aquellos sujetos que posean capacidad y poder económico la opción de un despliegue sin limitaciones de su comportamiento. Este paradigma, inserto en las raíces mismas del modelo neoliberal que ha retornado en toda su esencia, descarta la presencia del Estado en las relaciones propias del desarrollo capitalista, tanto en los procesos de inversión como en la regulación de los mecanismos de comercialización y financiamiento a los sujetos económicos de menor tamaño para que puedan tener poder de incidencia en el mercado.

Fruto de esta visión del desenvolvimiento de la economía nacional a partir de diciembre del 2015, se acentuaron las eliminaciones de acciones de política económica que acotasen o pusiesen límites al desempeño en el mercado de quienes detentan mayor poder y capacidad de acción, y se abandonaron o no se pusieron en marcha mecanismos tendientes a favorecer a los segmentos productivos de más débil inserción en las relaciones de producción. Así, normas sobre vigilancia de precios y control de posiciones monopólicas o disolución de organismos que, con apoyo estatal, intervenían en el desarrollo de los procesos productivos y en las estrategias de intercambio desaparecieron o no fueron potenciadas adecuadamente. Se destacaron, en el conjunto de las decisiones adoptadas, la eliminación de varios programas inspirados desde

la Secretaría de Comercio de la Nación y que acompañaron en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández la puesta en marcha de tramas vinculatorias entre producción y consumo oferente de alimentos de consumo imprescindible en las familias de bajos y medianos ingresos –masivos demandantes de los mismos, localizados preferentemente en las grandes aglomeraciones urbanas–.

La desaparición citada se correspondió con el nuevo esquema de ideas de la restauración neoliberal puesta en marcha desde el 10 de diciembre de 2015 a la que ya hemos hecho alusión. No fue una sorpresa la interrupción de la RED COMPRAR, que consistió en la instalación de centros de comercialización de tamaño singular en distintas áreas metropolitanas del país que fue desactivado y congelado. Junto con ello se debilitaron seriamente y se abandonaron las políticas adecuadas de promoción de los agricultores familiares responsables de la producción de alimentos en las diversas regiones del país. La Secretaría de Agricultura Familiar fue degradada a subsecretaría y afrontó la cesantía y/o la inactividad de numerosos profesionales dedicados al sector en todo el ámbito nacional. La Ley de Promoción Integral de la Agricultura Familiar sancionada por el Congreso Nacional a fines del año 2014 no fue aún reglamentada y, por ende, no entró a cumplir su importante utilidad práctica de apoyo amplio y variado a los pequeños productores agrarios asentados en todo el territorio nacional. La ley incluye una colección articulada de acciones, desde el reconocimiento de la propiedad rural como un bien social hasta la programación de intervención directa en su tenencia para favorecer a los que menos tienen, que incluye un Banco de Tierras y Planes diversos de colonización asistida. También

se desactivaron los Programas Nacionales de Promoción de la Economía Solidaria de los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, de Producción y se desfinanciaron las actividades científicas de extensión que realizan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

¿Qué objetivos se planteaban quienes, en los años que antecedieron a la transferencia del Poder en 2015, alentaron diversas dependencias públicas nacionales y provinciales con el fin de eliminar intermediación y garantizar precio justo a los productores y asequible a los consumidores? En primer lugar, la apertura de centros de abastecimientos de gran porte en áreas muy pobladas de diferentes aglomeraciones urbanas del país aspiraba a vigorizar y asegurar salida efectiva a la producción local de alimentos por parte de agentes económicos incorporados a la agricultura familiar.

Ello implicaba el acceso crecientemente masivo de consumidores residentes en barrios periféricos de las grandes aglomeraciones a productos que conformaban la canasta básica de alimentos y que reducían sus precios por la eliminación de prácticas monopolistas y de supresión de intermediación innecesaria. A ello se agregaba la presencia de un programa muy original, de adhesión voluntaria, que suponía el armado de un listado de numerosos productos de uso cotidiano por las familias para su subsistencia (en particular alimentos) que merced acuerdo con las cadenas de supermercados privados se vendían a precios reducidos. Este programa llamado «Precios Cuidados» no suponía un quebranto para las comercializadoras

de las grandes cadenas de súper e hipermercados, dado que el margen de ganancia que necesariamente se reducía en la comercialización de los productos se compensaba con lo que es habitual en un comprador en esos establecimientos de gran tamaño y otros bienes que requerían las familias para su consumo habitual. El costo que implicaba para las grandes empresas el bajar los precios en un grupo selectivo de bienes constituía en cierto modo el gasto necesario de propaganda para atraer consumidores. De ningún modo, debe recalcarse, tal modalidad de venta suponía un quebranto para las empresas comercializadoras al público. Puesto en marcha este programa a inicios del 2014, cuando un salto devaluatorio (golpe económico) en nuestra moneda apareció inesperadamente impuesto por el mercado, se pudo mantener y respetar por el decidido apoyo popular que actuó como mecanismo de control de disponibilidad amplia y respeto a los precios acordados de los bienes incluidos en el mismo. Dicho sea de paso, tan buen resultado supuso que, para que los consumidores de medios y bajos ingresos pudiesen hacer frente a las remarcaciones masivas, producido el cambio de gobierno a fines del 2015, la nueva administración los mantuvo y mantiene, aunque el nivel de cumplimiento de los supermercadistas es muy bajo dado que el control popular desapareció.

En segundo lugar, estas modalidades fueron impulsadas decididamente por algunos Gobiernos provinciales (caso Mendoza y Chaco) y Municipales (caso San Luis, Bariloche, Moreno, Cañuelas entre otros) donde se localizaba la producción de los alimentos, lo que posibilitó efectos muy favorables para dichos agricultores que se fueron incorporando progresivamente al acuerdo con el Estado nacional y el

de las provincias. Este beneficio suponía certeza de venta de producción, precios justos y acordes con un ingreso adecuado para los agricultores, y eliminación de intermediación innecesaria.

Al mismo tiempo se amplió decididamente la presencia de ferias en espacios públicos merced a la decidida colaboración del INTA y de las entidades públicas y de agrupamiento de agricultores familiares comprometida en la oferta permanente de los productos. Estas ferias tuvieron un incremento explosivo en muchas ciudades dispersas en todo el país y los programas incluso fueron adoptados por centros universitarios y organizaciones sociales sin fines de lucro. Dos de las experiencias más ricas están asentadas en las respectivas Facultades de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata (se origina en 2008) y la Universidad de Buenos Aires (2012), con dimensiones crecientes. El ejemplo más significativo es la experiencia de las Ferias Francas surgidas en la provincia de Misiones (allá por los años noventa) y generalizadas en gran parte del país. También cabe mencionar las diversas experiencias de los «bolsones de verduras frescas» de distintas organizaciones sociales que vinculan producción-consumo, como el caso de la Universidad Nacional de Quilmes.

Las experiencias referidas promovidas desde el Estado, que facilitó la conformación de múltiples redes entre productores y consumidores, han sufrido serios retrocesos en los últimos dos años de restauración conservadora en la Argentina. En las siguientes páginas nos dedicaremos a puntualizar en detalle una estrategia alternativa que pueda suplantar la ausencia del Estado en la promoción

de estas valiosas iniciativas e incluso poner en marcha esfuerzos similares que pudiesen contar con protagonismo de actores públicos y privados interesados en hacer frente a las serias dificultades de amplios segmentos de la población que se ven afectados en sus ingresos reales por el persistente aumento de precios de bienes y servicios que sirven a la subsistencia cotidiana de las familias.

QUÉ SON Y CÓMO OPERAN LOS CÍRCULOS DE PRODUCCIÓN-CONSUMO

En el espacio de la actividad comercial y en lo relativo a los procesos productivos del sector de la actividad agropecuaria vinculada al aprovisionamiento de alimentos a los centros urbanos, queremos exponer, con la mayor precisión posible, algunas ideas referidas a la generación de espacios de producción, intercambio y consumo de tales alimentos que hoy ofrece la agricultura familiar y la economía solidaria a la población urbana del país.

En la experiencia de la política económica neoliberal en marcha, la provisión de alimentos e insumos para el consumo interno que realizan los productores de la agricultura familiar experimentó serios retrocesos, tanto desde el punto de vista del volumen comercializado (por la caída de los ingresos reales de la población cómo la desmedida competencia importadora) y la ausencia de los programas de promoción como de los recursos monetarios que percibieron los agricultores como el Programa Nacional de Microcréditos, al abandonarse las políticas de defensa de los precios que

había puesto en marcha la Secretaría de Comercio Nacional. Estadísticas oficiales y datos provenientes de organismos privados especializados así lo consignan (Ver CAME y los informes del Instituto German Abdala de la UMET).

La creación de círculos de producción-consumo tiende a restaurar las ideas que animaron los programas nacionales del período 2003-2015, junto con políticas provinciales y municipales tendientes a reducir precios de venta de alimentos destinados a la demanda urbana de sus habitantes de menores recursos económicos, dado que eliminan intermediación y acercan a productores y consumidores. De este modo se garantizaba a tales productores valores de ventas capaces de ser incorporados a los procesos de capitalización de sus actividades y se aseguraban ventas masivas al consumo local y nacional. Esos mismos objetivos pretende alcanzar la iniciativa que proponemos, tendiente a crear, dentro de ámbitos periurbanos, lo que denominamos «círculos de producción- consumo» orientados a operar en ámbitos locales.

¿En qué consisten los planes que apuntan a organizar círculos de producción-consumo? La hipótesis básica que manejamos es que si el mercado funciona libremente sin un adecuado respaldo a los que producen y consumen en situaciones de debilidad y subordinación estructural, quienes participan del lado de la oferta y la demanda están expuestos a sufrir presiones y manejos de las respectivas transacciones que reducen en mayor o menos magnitud los ingresos que les deberían corresponder por su actividad productiva y su consumo cotidiano. En otras palabras, dejar librado al accionar del mercado a actores sociales con

muy diferente poder de negociación, del lado de la oferta, y consumidores que no poseen capacidad de acceso a las compras con modalidades que garanticen precios aptos para valorizar su ingreso real, perjudica a ambos segmentos pues deja dicho mercado a merced del poder abusivo ejercido por quienes detentan elevada capacidad de control de las transacciones. Un comercio totalmente desregulado suele implicar, para un producto determinado, que un intermediario de gran tamaño y presencia en el proceso de transacciones comercialice sus ventas imponiendo precios y condiciones de venta tales que desplaza a los pequeños productores que pretenden ingresar a dicho mercado. Al mismo tiempo, el poder negociador que tales actores de gran tamaño suelen manejar les posibilita imponer condiciones en precios y modalidades de venta a quienes comercializan su producción, siempre mucho más favorables que las que pueden alcanzar actores sociales de muy débil presencia en el correspondiente mercado. Por el otro lado, la mayoría de los habitantes de los aglomerados urbanos consumidores de dichos productos poseen capacidad de compra limitada dado que sus ingresos nominales están restringidos y si las ventas están en manos de empresas comerciales de gran tamaño no pueden aspirar a la posibilidad cierta de soportar precios abusivos que nadie regula, lo que reduce su calidad de vida.

La decidida falta de regulación del Estado en la organización y control de las operaciones de compraventa de alimentos de primera necesidad, que hacen a la subsistencia de la mayoría de los habitantes que residen en las aglomeraciones urbanas en todo el país, se torna indispensable e ineludible. El nivel de desigualdad social librado a las conductas monopólicas de grandes

conglomerados de intermediación comercial y especulación financiera acentúan los procesos de pauperización creciente de los hogares que perciben ingresos limitados. El gran desafío es que la vinculación entre producción y consumo popular debe suplir la ausencia de la acción reparadora de regulación estatal, y debe apuntar a:

- 1) Menguar el poder abusivo del conglomerado comercializador de alimentos de primera necesidad para que no utilice su presencia dominante en el mercado para imponer precios desmedidos.
- 2) Apoyar al pequeño productor, mayoritario habitualmente en los segmentos de producción de alimentos frescos o insumos para la elaboración de manufacturas alimenticias, para evitar que quede marginado en su capacidad de recibir precios justos que lo habiliten para una adecuada capitalización de sus excedentes o más luego de satisfacer las necesidades básicas para la subsistencia de su unidad familiar.
- 3) Que el consumidor urbano no quede preso de las estructuras monopólicas tanto de la producción como de la intermediación de quienes controlan el mercado. Resulta fundamental fortalecer el trabajo de las asociaciones de consumidores, especialmente las organizaciones que promueven el precio justo y el consumo responsable.

Estas tres condiciones, por ende, imponen la necesidad de una función de control y compensación de las desigualdades propias del sistema capitalista que conllevan la existencia de márgenes abusivos en la comercialización de la

producción de alimentos, precisamente por la condición monopólica u oligopólica en que se realizan. Esta situación es signo evidente de por qué los programas de política económica destinados a fortalecer progresivamente de modo ascendente el ingreso de pequeños productores y de las asociaciones de consumidores surgen cuando los proyectos económicos globales apuntan a consolidar el mercado interno y el poder adquisitivo de la población, antes que a satisfacer las ganancias de un pequeño sector de grandes operadores en los mercados.

Las experiencias incluidas en la estrategia de fortalecimiento en el ingreso de los agricultores familiares y en la disminución de precios al consumidor directo se reprodujeron, como dijimos, en el interior del país con resultados muy favorables. Esta estrategia nos ha de servir para desarrollar nuestra propuesta teniendo en cuenta:

1) El enfoque dominante en los ámbitos oficiales a nivel nacional y de varios distritos importantes del país de excluir todo tipo de regulación del mercado.

2) Los resultados, en términos de ingresos reales de los consumidores de medios y bajos recursos, han sido desalentadores cotejando la situación experimentada por el poder adquisitivo de esos mayoritarios segmentos de la población, si se cotejan los años 2017 con el 2015. Ello, producto del abandono de la política central de la estrategia económica del Gobierno nacional, comentada en el apartado inicial de este texto, de desalentar el consumo vía la pérdida de ingresos reales (estadísticas confiables indican que el promedio de los trabajadores asalariados tuvo un descenso en torno al 4% para los activos y 8% para los pasivos entre noviembre del 2015 y

diciembre del 2017).

3) Que ante ambas evidencias urge recomponer modalidades esenciales de regulación del mercado para defender la capacidad de compra de los consumidores urbanos y el nivel de ingresos de los pequeños productores rurales de la agricultura familiar, pero en un plano diferente al experimentado hace más de dos años habida cuenta del retiro del Estado nacional de su función reguladora.

A partir del reconocimiento de que a nivel nacional no cabe en el proyecto oficial, en materia de política económica, hacer jugar al Estado un rol central en la vigilancia de precios y en el fomento de la producción nacional y la economía solidaria, tanto los que reciben los productores por sus bienes de primera necesidad o los demandantes para sostener su nivel de vida, es necesario cambiar de referente para una política que favorezca a estos dos grandes segmentos de la población. El actual Gobierno nacional designó al frente de la Secretaría de Comercio a un representante del sector concentrado en una clara definición política de favorecer a los agentes económicos de gran dimensión para que impongan sus reglas especulativas de subordinación a la pequeña producción rural y, a la vez, un importante agente comercializador que hace uso de su capacidad de dominación en los precios de ventas de productos finales en desmedro del poder adquisitivo de los consumidores. Es imprescindible, entonces, que aparezcan otros actores para llevar adelante una estrategia de intervención y regulación como la que sostenemos.

En tal sentido, apuntamos a la búsqueda, por parte de los sectores sociales que queremos favorecer, de aquellos

organismos públicos pertenecientes a ámbitos administrativos alternativos dispuestos a actuar de soporte o «paraguas» de una iniciativa alternativa. Dentro del territorio nacional existen Gobiernos provinciales y numerosos municipios dispuestos a recuperar roles imprescindibles a nivel estatal para impedir abusos derivados de la capacidad de dominación de los mercados, que aceptarían estrategias orientadas a impedir la expoliación por pocos sobre los mayoritarios segmentos de la agricultura familiar y , a la vez, garantizarían a los sectores de medios y bajos ingresos precios a los cuales puedan adquirir bienes de primera necesidad para su manutención. Si el Estado nacional renuncia a una tarea que debería ser prioritaria y obligatoria, dada las desigualdades de poder en los mercados en ámbitos locales (sean estos provinciales o, más aún, municipales), es posible intentar diseñar acciones del sector público a nivel inferior que cumplan esa irrenunciable misión.

Para ello es imprescindible armar una propuesta compuesta por la asociación estrecha entre productores, consumidores y sectores del poder público. Dadas las características generales que hemos descrito del perfil ideológico de la actual conducción nacional, será preciso reemplazar su inexistencia de acción con el apoyo de los Gobiernos locales comprometidos con el desarrollo endógeno y la integración social.

La situación más compleja de este armado de los círculos que propugnamos es que, al desaparecer el Estado nacional como principal promotor, la conformación de acuerdos entre producción y consumo, entre agentes encargados de la entrega al mercado de los bienes de primera necesidad, no se encuentran fácilmente

en condiciones de ser articulada a nivel de todo el territorio nacional. Un ejemplo relevante: si la producción de frutas de pepita (peras y manzanas) obtenida en el Alto Valle del Río Negro pretende ser enviada a un eventual mercado concentrador en el Gran Buenos Aires, será muy complicado convenir todos los detalles de una operación a distancia solo con la gestión de dos municipios que respalden el acuerdo, dado que están localizados geográficamente muy lejos uno de otro y sin contar con apoyo estatal para, llegado el caso, utilizar el ferrocarril como medio de transporte.

Esta dificultad relacionada con la distancia geográfica entre producción y consumo se agrava aún más si los municipios en donde se podría contar con apoyo del Estado para la gestión entre producción y consumo –como suele ocurrir– no disponen de recursos suficientes para apoyar iniciativas como las que estamos debatiendo y, menos aún, poseen logística y experiencia para concretarlas. Por otro lado, cabe esperar que como resultado del accionar articulado entre productores y consumidores, con la presencia ineludible del Estado como gestor y garante de los acuerdos, será mucho más beneficioso para las experiencias de desarrollo local si se perfeccionan en espacios reducidos, en donde se generen otros beneficios adicionales. En este último aspecto nos estamos refiriendo a los efectos directos e indirectos deparados por los beneficios resultantes de un accionar articulado y planificado entre productores y consumidores. Estamos atendiendo a las características peculiares de funcionamiento de una estructura productiva destinada hoy día a la tarea de ofrecer alimentos frescos en los cinturones hortifrutícolas de las aglomeraciones urbanas.

En el ámbito de toda aglomeración urbana de cierta magnitud es dable encontrar franjas de productores locales que diariamente abastecen de alimentos frescos de todo tipo (carne vacuna, porcina, aviar, hortalizas, legumbres, verduras de hoja, leche, huevos, etcétera), en muchos casos ya provistos por agentes económicos cercanos a la aglomeración o que pueden proveerse de los mismos si se estimula la cría o el cultivo respectivo al tener mercado asegurado. La transacción entre productor y consumidor implica además numerosos impactos favorables de todo tipo. Una expansión programada de la producción generada a nivel local para satisfacer los consumos de la población urbana cercana supone aumento de cantidad de productores, robustecimiento y expansión de los existentes e incremento del empleo tanto por parte de nuevas unidades y agricultura familiar o ampliación de las múltiples modalidades de empleo estacional. Como contraparte de este proceso es posible imaginar mejoras de diverso tipo en calidad y cantidad entre todos aquellos agentes económicos que se relacionan con los procesos de producción-consumo. Estamos hablando de medios de transporte, espacios para depósitos, zonas en donde se localizan unidades de venta como son mercados o ferias, lo que implica aumento de puestos de trabajo. Del lado del consumo, la esperable baja de precios de los productores indispensables para la subsistencia, fruto de los acuerdos precitados, aumenta el ingreso disponible de las familias de los sectores de medios y bajos recursos con el consiguiente impacto favorable en otros tipos de consumo familiar.

El rol del Estado local es en este aspecto estratégico para soldar los acuerdos entre productores y consumidores y obtener beneficios para el desarrollo integral

de los municipios. La construcción de esta estrategia política supone la puesta en marcha de iniciativas de economía solidaria y asociativa, articulación con otros Gobiernos locales y obtención de beneficios derivados de ventas en gran cantidad. A la vez, implican el surgimiento y consolidación de medios de transporte relacionados con las asociaciones de productores, de financiamiento de entidades bancarias locales, de acuerdos con universidades para mejora técnica de la producción, de compras asociativas en insumos, agroquímicos, envases, etcétera.

Este texto solo incluye una primera aproximación a la conformación de alianzas entre productores y consumidores en diversificados espacios locales. El abordaje más detallado de la iniciativa nos permitirá apreciar que la misma ya tiene experiencias previas, de carácter voluntario, que se encuentran en la búsqueda del autosustento, pero aún permanecen aisladas y sin una programación global que permita recuperar todos los beneficios que le asignamos a priori.

Una estructura tal como la que sugerimos posee numerosos efectos positivos sobre la trama productiva y social en el espacio en que se desenvuelve, tanto por sus efectos directos como por sus impactos y repercusiones sobre actores sociales diversos asentados en las localizaciones escogidas. El análisis metodológico correspondiente es la materia de nuestras actuales inquietudes, las cuales pensamos volcar muy próximamente en una versión integral más amplia sobre este proyecto... Esta es la tarea a la que estamos ahora comprometidos.

LA MIRADA ESTRATÉGICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNA RED DE CÍRCULOS DE PRODUCCIÓN-CONSUMO

Al considerar el potencial de compra de los sectores populares, y en defensa del salario real de los trabajadores, se debe buscar formas organizativas que permitan menguar el poder discrecional de las grandes corporaciones formadoras de precios y evitar el abuso de su poder oligopólico en el mercado. Las diversas experiencias existentes de vinculación entre producción y consumo permiten visualizar el alto nivel de aceptación en la población (principalmente en las grandes ciudades) y de concientización alcanzado por gran parte de los consumidores que han entendido que entre los causales en los aumentos desmedidos de precios que generan «inflación» están las grandes empresas concentradas en cada sector de la producción y también en la intermediación comercial y financiera.

Es necesario poner estas experiencias en red para potenciar el poder organizativo de productores y consumidores que permitan generar condiciones locales que regulen la intermediación comercial y, a la vez, para facilitar los procesos organizativos socioproductivos de las pequeñas y medianas empresas nacionales y locales. Esas formas organizativas deberían contemplar la preeminencia de la Economía Social y Solidaria como marco para su concreción. La iniciativa expuesta valoriza la presencia de redes de productores-consumidores populares que puedan fortalecer la capacidad instalada tanto del comercio de aproximación como del mayorista, quienes padecen situaciones desfavorables ante los excesos

de las empresas concentradas. Se trata de una red de producción-consumo con base territorial que pueda brindar hasta la posibilidad de diseñar un plan de abaratamiento del consumo local y pueda plantearse metas de producción y desarrollo alcanzables en el mediano plazo.

Si lográramos canalizar tan solo un 10% del consumo popular en alimentos a través de las redes y circuitos comerciales con producción local y con participación de la Economía Social y Solidaria, ello permitiría mejorar los precios al consumidor, ganar en calidad de los productos, generar nuevos puestos de trabajo, garantizar buena alimentación en los sectores populares, y posibilitaría el cuidado del medio ambiente, sobre todo si se estimula la agroecología como objetivo central. En definitiva: avanzar en la democratización del mercado y concretar el desarrollo con mayor integración social. Con esta misión es posible interpelar las acciones del Estado que deberán dejar de tener la mirada asistencial del financiamiento de proyectos productivos para pasar a impulsar propuestas de desarrollo territorial integral con mayor acción de regulación comercial que potencien las Pyme locales y las empresas de la Economía Social y Solidaria. Así, las dependencias estatales locales deberán asumir acciones programáticas de mayor presencia regulatoria en el mercado y disponer de capacidad de control sobre las empresas oligopólicas para destrabar las lógicas corporativas del intercambio comercial, facilitar el acceso a mejores condiciones de la producción local y brindar resguardo al consumo popular.

Simultáneamente, las organizaciones de la Economía Social y Solidaria deberán profundizar la etapa de resistencia a

las políticas de ajuste y concentración económica, potenciar el trabajo voluntario-artesanal subordinadas a las prácticas de financiamiento por proyecto para pasar a una ofensiva de autogestión en la construcción de poder territorial tanto en el plano productivo como en el político. Se ganaría así mayor presencia con sus productos en los mercados, disputarían espacios en las cadenas de producción y sumarían a las asociaciones de consumidores para ser más protagónicas en la democratización del mercado.

De este modo se fomenta el compra local y el compra cooperativo a partir del consumo responsable y el precio justo como factores que permitan organizar el consumo popular. Debe ser una acción coordinada que interpele a las diferentes agencias y dependencias del Estado provincial y municipal, en articulación con las organizaciones de productores locales estructuradas de acuerdo a los principios de la economía social y en gestión mancomunada con las asociaciones de consumidores.

Distinguimos tres niveles de complejidad en el entramado de construcción de los círculos de producción y consumo a nivel local: el proceso de construcción colectiva pensada siempre como punto de partida, nunca como punto de llegada; el conjugar la mirada de largo plazo con políticas activas que requieran efectos inmediatos en defensa del trabajo y de la producción local; y el sostenimiento del consumo popular ante la especulación de la intermediación comercial y de las empresas oligopólicas en el mercado.

Una etapa ulterior podría vincular todas las experiencias productivas articuladas entre sí con los grupos y asociaciones

de consumidores locales (formales e informales) donde se incorporen comerciantes, empresas nacionales y Pyme locales para que se extienda la mirada territorial sobre los distintos actores de la economía. A partir de ese enfoque es necesario incorporar a cooperativas de trabajo, organizaciones de microcrédito, asociaciones de productores familiares y campesinas, cooperativas de servicios públicos y mutuales, asociaciones de consumidores, centros vecinales, bibliotecas populares, centros religiosos, asociaciones de comerciantes, cámaras Pyme, organizaciones sindicales, clubes barriales que puedan aportar bienes y servicios a la distribución y la organización del consumo popular y ampliar la cobertura de los acuerdos que se alcancen.

Al mismo tiempo, será factible encarar una etapa orientada a conformar la provisión de canastas básicas de alimentos a partir de una amplia participación de actores económicos, productivos y comerciales con incorporación de las organizaciones citadas, representadas en espacios colectivos por región, localidad o barrio bajo la modalidad de *consorcios de gestión local* que permitan establecer una práctica concreta que multiplique las experiencias existentes o generen nuevas iniciativas.

Todas estas experiencias han tenido años atrás principios de concreción, están todavía muy desarticuladas pero son valiosas como experiencias colectivas a alentar. El apoyo estatal local luce como imprescindible, pero no tanto como fuente de provisión de recursos monetarios, sino como herramienta de gestión.

En definitiva, nos referimos a nuevas *políticas públicas locales* que posibiliten extender, multiplicar y

fortalecer los procesos organizativos de carácter asociativo, enmarcados en la Economía Social y Solidaria con nuevas formas de apoyo, de fomento y promoción que asuman la responsabilidad de integrar la producción y organizar el consumo popular a través del microcrédito, los fondos rotatorios, la moneda electrónica, etcétera. De este modo se pueden generar instrumentos de finanzas solidarias, de alcance masivo, que permitan fortalecer las redes de producción-consumo populares para direccionar el consumo masivo.

La propuesta es crear en cada barrio, pueblo, localidad *círculos de producción y consumo popular* para contribuir en la construcción de esta gran red de redes. Se requiere de mayor vinculación territorial para integrar las ferias populares y mercados solidarios, potenciar a las cooperativas productoras de alimentos, integrar las diferentes prácticas de organización del consumo popular y ampliar la discusión sobre el desarrollo local con los almacenes barriales, comercios locales, municipios, sindicatos y el amplio mundo de las Pyme.

El gran desafío es fortalecer la identidad de las organizaciones solidarias, reconocer la conflictividad en el territorio donde se materializan las desigualdades, donde se dan los problemas de la comercialización, donde se concretan las situaciones de exclusión y sobreexplotación. Desde la experiencia de la Economía Social alcanzada se trata de organizar y multiplicar las capacidades desplegadas con más prácticas colectivas y solidarias. Es una construcción de base territorial, de abajo hacia arriba, para enfrentar la concentración económica y poder avanzar en términos de desarrollo con mayor integración social.

BIBLIOGRAFÍA

- Basualdo, E. (2011). La autonomía relativa de la economía argentina durante la hegemonía neoliberal a nivel internacional. En Eduardo Basualdo (Comp.), *Sistema político y modelo de acumulación: tres ensayos sobre la Argentina actual*. Buenos Aires: Editorial Ariel.
- Cittadini, R., Luis Caballero, Mariana Moriz y Florencia Mainella (Comps.) (2010). *Economía Social y Agricultura Familiar: hacia nuevos paradigmas de intervención*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-MAGyP.
- Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) (2011). *1º Congreso Latinoamericano de Microcrédito: Nuestra Palabra Tiene Crédito*. Buenos Aires: Ministerio Desarrollo Social de la Nación.
- Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) e Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) (2010). La Juntada: microcrédito, tecnología y gestión asociada en la agricultura familiar. En Gustavo Tito y otros. *IPAF- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) (2018). Informes mensuales sobre consumo del comercio minorista en todo el país, años 2015-2018.
- Coraggio, J. L. (2011). *Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital*. Quito: Acosta y Martínez Editores.
- Coraggio, J. L. (2008). *Economía Social, acción pública y política: hay vida después del neoliberalismo*. Buenos Aires: Ediciones CICCUS.
- Gandulfo, A. (2012) Nuevos desafíos para el desarrollo de la Economía Social y Solidaria en la Argentina. En Sidney Lianza y Flavio Chedid Henriques (Orgs.), *A Economía Solidária Na América Latina: realidades nacionales e políticas públicas* (pp. 113-123). Rio de Janeiro: RILESS, SENAES.
- Gandulfo, A. (2014). El Desarrollo Territorial de la Economía Social y Solidaria. *Voces en el Fénix*, 28.
- Gandulfo, A. (2014). Finanzas Solidarias en la profundización del Proyecto Nacional y Popular. *Voces en el Fénix*, 38.
- Gandulfo, A. y Alejandro Rofman (2016). Finanzas Solidarias en la Argentina: a 10 años de la promulgación de la Ley Nacional 26117. *Realidad Económica*, 302.
- García, A. y Alejandro Rofman (2012). *Economía Solidaria en Argentina: hacia la construcción de un nuevo proyecto de país*. Buenos Aires: DT, CEUR.
- Golsberg, C. y otros (2010). *Las Ferias de la Agricultura Familiar en la Argentina*. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Instituto Germán Abdala, UMET.
Informes mensuales sobre coyuntura económica y social, 2016-2018. Buenos Aires: UMET.

Merlinsky, G. y Adriana Rofman (2005).
Los programas de promoción de la Economía Social Una nueva agenda para las políticas sociales. En Floreal H. Forni (Comp.), *Caminos Solidarios de la economía argentina.* Buenos Aires: Ediciones Ciccus.

Rofman, A. (2012). La economía solidaria y los desafíos actuales. *Revista de Ciencias Sociales.*

Rofman, A. y Alberto Gandulfo (2015). La Economía Social y Solidaria en la Argentina contemporánea: logros y desafíos. En Santiago Fraschina y Arturo Trinelli (Comps.), *Una Década Ganada: gestión económica kirchnerista en perspectiva (2003-2013).* Avellaneda: Ediciones UNDAV.

Rofman, A. y Juan M. Vázquez Blanco (2011). Al cierre del Bicentenario Dos modelos de país en disputa. En S. Fraschina y Juan M. Vázquez Blanco, *Aportes de la Economía Política en el Bicentenario.* Buenos Aires: Editorial Prometeo.

Rosa, Pauña, Regina Vidosa, Ariel García y Juan M. Vázquez Blanco (2012). Caminos hacia la inclusión. En Raquel Castronovo (Comp.), *Políticas sociales en el Bicentenario.* Buenos Aires: EUDEBA.

